

---

# CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO\*

Jorge E. Brenna Becerril

## Resumen

En México, las elecciones experimentan cambios cada vez menos lentos: de ser un medio de legitimación de un Estado corporativo, son cada vez más un medio de confrontación civilizada entre las fuerzas sociales y políticas. Sin embargo, este patrón democrático aún no logra perfilarse, pues las inercias de un régimen autoritario y un sistema político desfasado de las necesidades sociales y de las nuevas identidades de la sociedad han creado un estado de guerra en el que la vía electoral parece desdibujarse como una opción de reconciliación nacional y de refundación de un nuevo orden social y político. Reorganizar las reglas para la búsqueda de un *nuevo consenso* y una *nueva legitimidad* es la apuesta de los nuevos actores sociales en el presente.

## Abstract

Mexico's elections are suffering new changes: of being a legitimacy source of a corporative state they have become a civilized confrontation between political and social forces. Nevertheless, this democratical pattern has not work because of the inertia of an authoritative regime and a political system that do not satisfy social needs and new social identities. This situation creates war conditions where the electoral system hasn't become a national reconciliation choice and a new foundation of a political and social order.

Today challenge for new social actors is to reorganize roles to forge new consensus (general assent) and a new legitimacy.

El propósito de este ensayo es iniciar un acercamiento teórico e histórico al problema de la representación y la participación política en el México de los años noventa. Partiremos de una hipótesis de trabajo: *el sistema político mexicano ha llegado a un punto tal de degradación en sus mecanismos de intermediación que hace que los mecanismos de repre-*

\* El presente documento fue elaborado para las sesiones de trabajo del seminario interno sobre *Las elecciones federales en 1994*, organizado por la Coordinación de Ciencia Política de la FCPS/UNAM durante los meses de marzo a septiembre de 1994.

*sentación partidaria no puedan, por la vía electoral, reproducir el consenso y la legitimidad de un régimen en crisis.*

Una segunda hipótesis, derivada de la anterior, establecería que *la crisis político-institucional ha abierto canales informales de participación política, al margen de los tradicionales, por los cuales ha optado un sector numeroso de la sociedad civil.* En este sentido, las elecciones de agosto de 1994 quedarían enmarcadas en una *crisis de legitimidad*, consagrada en 1988, y una *crisis de representación política*, exacerbada en enero de 1994, que *hace cuestionable la vía electoral como opción de refundación de la legitimidad política y de reconciliación nacional.*

El trabajo está dividido de la siguiente manera: una introducción breve cumple la función de plantear un esquema analítico de la situación política en la que enmarcamos nuestro problema. Un primer apartado nos introduce en la cuestión de la crisis de representación en las democracias contemporáneas y su relación con la evolución de la crisis de los partidos políticos. En un segundo apartado abordamos el problema de la participación política en función de condicionantes histórico-políticas del régimen mexicano y otras de índole socioeconómica. En un tercer apartado visualizamos el fenómeno de las nuevas identidades sociales y políticas gestadas al calor de la crisis y las formas de participación política que ello supone. Finalmente, trataríamos de retomar los desarrollos anteriores en un intento de explicación de la rebelión ciudadana de los años noventa, expresada de diversas formas (incluyendo la violencia).

## El problema...

En la mayoría de las democracias capitalistas se atraviesa por una *crisis de representatividad del Estado contemporáneo* que ha obligado a un ajuste del principio clásico de representación. El *modelo del mercado* parece estarse imponiendo colocando a la orden del día una creciente competencia entre grupos autoelegidos. En este proceso, la participación ciudadana ha quedado reducida a la función de legitimar, de entre las propias élites, a unos representantes con un precario consenso. *Las elecciones son insuficientes para modificar las políticas de gobierno y ni siquiera logran dar pie a nuevos proyectos políticos reduciéndose solamente a integrar el escaso consenso que se produce en las sociedades.*

Desde hace más de una década, el Estado enfrenta presiones que le han obligado a transformarse en tanto que las decisiones de poder

parecen estarse definiendo, cada vez más, por un *policentrismo* estructurado por diversos agentes (nuevos movimientos sociales, grupos de interés, corporaciones, *lobbies*, etcétera). El *proceso decisional* se ve afectado por una fragmentación que en sus intersticios ha dejado espacios a ciertos actores bloqueando los canales de participación formales y estimulando los informales.

*En el marco del proceso anterior, el Estado social democrático parece haber dejado de ser el centro del principio representativo transformándose en un Estado funcional que, más que integrar consensos, sólo resuelve conflictos sucesivos en el sistema adaptándose a las presiones de los grupos de interés que, en un momento dado, determinan la política.*

En México, el esquema de reproducción de consensos basado en el corporativismo parece haberse resquebrajado sin remedio. Sin embargo, ¿se ha buscado sentar las bases para la creación de un nuevo esquema de construcción del consenso social para lo que aún queda de Estado social? Evidentemente no, prueba de ello son las dificultades que está suponiendo para el régimen la creación del consenso social y la incapacidad del sistema partidario para representar un mecanismo eficiente de producción y reproducción de un consenso democrático.

En los años ochenta el Estado mexicano inició un proceso de autorreforma, fragmentario, que sólo incidió en la esfera de la economía modificando mecanismos tradicionales de intervención en el ejercicio de su *función de acumulación* no así en el de su *función de legitimidad y consenso*.<sup>1</sup> Actores económicos privilegiados se inflaron a la sombra de esta reforma mientras otros vieron cercados sus espacios de sobrevivencia (pequeños empresarios, clases medias, trabajadores, campesinos, indígenas, etcétera). En este bárbaro proceso, el sistema político mexicano, en crisis desde los años setenta, vio deteriorarse aún más sus mecanismos de intermediación.

El *sistema de partidos*, ampliado a raíz de la crisis de representación evidenciada en las elecciones presidenciales de 1976, ha girado en torno a una voluntad por reformar pragmáticamente el marco electoral (como hasta ahora), más que en la dinámica de captar y dar cauce político a las demandas de los grupos sociales "excluidos" del desarrollo y las decisiones cruciales.

Julio de 1988 marca el punto más álgido de la *crisis de legitimidad*

<sup>1</sup> Cfr. Elmar Altvater, "Reestructuración o desmantelamiento del Estado social", en *Estudios Políticos*, vol. 5 núm. 34, México, FCPS-UNAM, julio-diciembre de 1986, p. 44.

del régimen político mexicano; sin embargo, enero de 1994 marca el de la *crisis de representación* del sistema político. Lo sorprendente, no obstante, ha sido la emergencia de *nuevos sujetos políticos* que, al margen de la representación partidaria, han ido definiendo sus propias identidades y sus propias formas de expresión política.

Ha sido la modernización neoliberal de Salinas de Gortari la que ha dividido, aún más, al país en un México de instituciones de tramoya y otro de realidades sociales subterráneas, ambos mundos separados por un abismo enorme que los partidos políticos distan mucho de poder zanjar, puesto que se han autoubicado del lado de la precaria legalidad electoral que ha sostenido al sistema los últimos veinte años de decadencia institucional.

Al parecer, han sido los grupos sociales excluidos del *pacto corporativo* (la iglesia, las comunidades indígenas, los cada vez más amplios contingentes del sector informal, pequeños empresarios, desempleados, demandantes de vivienda, etcétera), los que paulatinamente han ido constituyendo *formas marginales de expresión política*. El sismo de 1985 en la ciudad de México evidenció la existencia "civil" de algunos de ellos. La crisis política de 1988 los vio expresar su descontento y su demanda de participación efectiva en un marco de escepticismo político creciente.

A la luz de lo anterior hemos de preguntarnos: ¿puede hablarse cabalmente de una *crisis de representación política* expresada en la incapacidad del sistema de partidos para representar los intereses de una gran mayoría de sectores que, al margen del sistema de partidos, definen sus identidades y formas de participación política?

¿Puede ser considerado el estallido chiapaneco de enero de 1994 como un intento supremo de parte de los sectores más golpeados por la modernización salinista (y, por ende, mayormente excluidos de los mecanismos estatales de intermediación política) por denunciar y derribar un régimen de instituciones obsoletas e inoperantes que pretendían sostener una nación inexistente?

Para el futuro inmediato ¿pueden ser las elecciones presidenciales de agosto de 1994 un *factor de renovación* de las instituciones políticas básicas del país, y de su legitimidad, o más bien serán la prueba de fuego de una batalla, ahora frontal, entre nuevos sujetos políticos de una nueva sociedad civil y un viejo sistema político que se niega a reestructurarse sobre bases nuevas?

¿Las próximas elecciones serán representativas de las demandas reales de los grupos sociales que ahora han hecho sentir al conjunto de

la sociedad su presencia social, su *ciudadanía*, y la *urgencia de un* desagravio social y político?

### Crisis de representación y los nuevos actores de la crisis

Los diagnósticos de una crisis de representación de las organizaciones partidarias son diversos.<sup>2</sup> Nos interesa el punto de vista de Claus Offe, según el cual, a pesar de la estabilidad de la democracia liberal burguesa, ésta tiene sus límites o fallos en el funcionamiento de *mecanismos de mediación*. Esto, como señala, alude al "*problema de cómo explicar la compatibilidad entre los componentes estructurales de la "política de masas" y de la "economía de mercado..."*",<sup>3</sup> los de la relación compleja entre capitalismo y democracia.

Esta compatibilidad, que parecía eficaz e insuperable, surgió históricamente gracias a la aparición de dos grandes mecanismos de intermediación:

- Los partidos políticos de masas, la competencia entre ellos, y
- El Estado del bienestar keynesiano.

Estos "principios mediadores", como los denomina Offe, conforman una versión específica tanto de capitalismo como de democracia; sin embargo, a pesar de la generalización teórica que de ello se pueda hacer, es necesario tener cuidado con posibles extrapolaciones cuando se analizan sociedades de desarrollo capitalista postardío como lo es el caso mexicano. En esta sociedad, si bien se implementó una política de masas como mecanismo de integración de un Estado corporativo, no puede hablarse de partidos de masas ni mucho menos de una competencia entre los mismos. ¡Ni qué decir de la existencia de un Estado de Bienestar!

Posteriormente a la crisis mundial de los años setenta, el modelo socialdemócrata (que habían sustentado las democracias occidentales por más de treinta años) entra en crisis y con ello la forma estatal del Estado keynesiano, sustentador de alianzas partidarias y de clase con un sentido democrático. La crisis económica hace que estas alianzas se

<sup>2</sup> Cfr. Claus Offe, *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Ed. Sistema, 1988. También: Alan Wolfe, *Los límites de la legitimidad*, México, Ed. Siglo XXI, 1990, caps. 8 y 9.

<sup>3</sup> Cfr. Claus Offe, *op. cit.*, p. 57.

tambaleen y que se busquen nuevas formas de articulación de intereses. La vieja clase obrera y sus partidos de masas se ven, de pronto, ante una crisis para la que no tienen respuesta ni proyecto político alternativo frente al avance de la ideología conservadora (neoliberal) que ya se empezaba a proyectar con fuerza al calor de la impotencia socialdemócrata.

El *sistema político dual* (sistema de partidos-pacto corporativo)<sup>4</sup> veía mermada su eficacia y la representación partidaria dejaba grandes espacios a nuevos actores sociales que ya no se identificaban con las clases y los grupos tradicionales que hallaban representación en el sistema partidario del Estado social. Los hijos de la clase obrera “aburguesada” de los años cincuenta no encontraban continuidad en sus expectativas de movilidad social. La protesta estallaba a finales de los años sesenta y con ella los principios mediadores que aún se mantenían en pie. ¿El desarrollo capitalista sacaba de su equilibrio a la democracia o ésta acabó inhibiendo a aquél?

Una cosa es cierta, el partido político como forma predominante de representación de las masas en las democracias occidentales se estaba desintegrando aceleradamente, siendo sustituido gradualmente por otras formas y otros usos del poder estatal. La participación política de las masas a través del sistema de partidos, que se había expresado por medio de los principios de representación territorial-parlamentaria y competencia interpartidaria, se agotaba como forma idónea de la política de masas en el capitalismo. Otras prácticas y otros procedimientos de participación y representación política tomaban poco a poco su lugar en la sociedad industrial de los años ochenta.<sup>5</sup>

Alan Wolfe nos presenta un escenario marcado por *el agotamiento de las alternativas políticas*, en tanto que el “Estado del capitalismo tardío” ha crecido a tal punto que su poder potencial ha quedado compensado por la disminución de opciones disponibles, expresando así *el agotamiento de las alternativas políticas*. A partir de este momento el Estado se precipita en una espiral de contradicciones hasta llegar a un punto en que su utilidad para reproducir las relaciones sociales es prácticamente nula. El conflicto interno entre las clases y grupos sociales no disminuye y a éste se le agregan ahora los cambios en la hegemonía internacional que lo condicionan; consecuentemente, los sistemas políticos ven redu-

<sup>4</sup> Cfr. Ludolfo Paramio, *Tras el diluvio. La izquierda europea ante el fin de siglo*, México, Siglo XXI, 1988, p. 218.

<sup>5</sup> Cfr. Claus Offe, *op. cit.*, p. 66 y ss.

cidas sus opciones pasando a depender cada vez más de la actividad estatal, afectando sensiblemente la vida pública.

Wolfe presupone también, como Offe, un *derrumbe de los mecanismos de mediación*<sup>6</sup> interrogándose sobre su futuro en un escenario global de agotamiento de alternativas políticas. Las contradicciones del Estado y el desajuste recurrente de los subsistemas han llegado a un punto en que se extiende *la deslegitimación* a los partidos políticos

*convirtiéndose no en un vehículo de expresión sino en parte del conflicto mismo. Para servir al Estado tienen que despolitizar movilizándolo para preservar su [propia] legitimidad: así, los partidos políticos al igual que los ciudadanos tienen un carácter esquizofrénico.*<sup>7</sup>

El panorama anterior desembocaría en un diagnóstico lapidario: *la política enajenada en el capitalismo rigidiza a la sociedad creando una gran confusión en torno al significado y objeto de la vida política*. En este marco de rigideces la política es inestable; la pérdida de significado de los mecanismos de mediación viene a ser uno de los indicadores de la falta de "ductibilidad" y de la *despolitización creciente* que ha dejado de ser una estrategia de *control y hegemonía* para convertirse en una expresión fehaciente de la ausencia de éstos.

Ahora bien, la cuestión de la *representación política* está estrechamente ligada a la de la *participación política*. Ésta no es sólo electoral, sobre todo porque la insuficiencia de los mecanismos representativos alimentan la proliferación de múltiples cauces de participación que tiende a afectar directamente a los partidos políticos.

En este marco, los procesos electorales manifiestan un estancamiento general y, consecuentemente, el surgimiento de otras formas de participación sectorial.<sup>8</sup>

El problema de fondo que subyace es *la insuficiencia de los partidos políticos para abordar la mediación en sociedades complejas en las que se tiende a generar una multiplicidad de canales de participación y de actores políticos, la creación de nuevas identidades políticas al margen de las que ofertan los partidos y la innovación en las formas de partici-*

<sup>6</sup> Para Wolfe teóricamente los mecanismos de mediación (partidos políticos, asociaciones privadas, grupos de interés, etcétera) funcionan atemperando las demandas excesivas de los ciudadanos y las necesidades autoritarias del Estado. Cfr. Alan Wolfe, *op. cit.*, p. 331.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 335.

<sup>8</sup> Cfr. Cesáreo R. Aguilar de Pratt, "Problemas de la democracia y de los partidos en el Estado social", en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 67, Madrid, enero-marzo, 1990.

*pación política fuera del circuito de los sistemas de representación política.*

¿Por qué estos nuevos actores no son funcionales al sistema de representación tradicional?

- Porque *no solicitan participación directa;*
- y porque sólo buscan *ejercer influencia decisional y autonomía.*

En México, ¿sobre qué base se ha desarrollado, entonces, la compatibilización entre capitalismo y democracia, entre representación y participación política?

### **Participación, ciudadanía y marginalidad políticas**

En el apartado anterior habíamos señalado, en relación con los “principios de mediación” a los que Offe alude, que en México si bien se implementó una política de masas como mecanismo de integración de un Estado corporativo, no puede hablarse de partidos de masas ni mucho menos de una competencia entre los mismos. Aunado a lo anterior está el agravante de que el Estado de Bienestar fue abortado y en su lugar creció un Estado corporativo que más que producir e integrar consensos funcionaría a través de la coerción y control autoritario de las masas mediante las corporaciones oficiales.

El desarrollo del capitalismo mexicano ha sido asimétrico y polarizante; consecuentemente, la democracia correspondiente ha tenido que ser incompleta y desdibujada. Ni autoritarismo ni democracia, se ha dicho, sino una “democra-dura” que produce una frágil paz social. Sin embargo, ¿cuál es el lazo institucional que ha permitido la permanencia del régimen y la estabilidad del sistema político a pesar de la anómica relación entre capitalismo y democracia?

Hace falta esclarecer el complejo entramado de relaciones de mediación, sus mecanismos, que dieron lugar a los nexos complicados sobre los que se han sustentado las relaciones políticas que han articulado al régimen político y a la sociedad.<sup>9</sup> Democracia “mínima” y control político serán dos de los ingredientes básicos de un régimen *sui generis* que, en el presente, se ha mostrado incapaz de dar cauce a una participación política (sacrificada al control), que se ha desbordado a lo largo de los últimos veinte años. Así pues, está en crisis el esquema que hizo posible la relación Estado-sociedad en México:

<sup>9</sup> Cfr. Manuel Villa A., *El archipiélago mexicano*, México, Ed. Cal y Arena, 1990, p. 100.

*El proceso de descampesinización, el de migración, la extensión de la modernidad comercial y financiera, de los modelos de consumo, aunque no fueron los mejores medios, sirvieron para agotar ese patrón de complicidad entre lo federal y lo regional y local; y por su parte, y sobre todo, para minar la obra de desarrollo de los regímenes de la revolución, la que con todas sus contradicciones y límites ha sido la base de la transformación del país.<sup>10</sup>*

Hasta ahora la gran pregunta venía a ser en torno a las causas de la persistencia de la estructura autoritaria del régimen mexicano. A partir de 1988 es inevitable preguntarnos por su desarticulación y las condiciones de su reemplazo. Esto supondría reflexionar en torno al problema de *cómo restituir a los nuevos actores a un espacio público que se ha desarticulado por efecto de la crisis del orden sociopolítico.*

En suma, si parece haber ocurrido un cambio en las relaciones entre partidos y organizaciones sociales (permeadas por el principio corporativo), así como un incremento de sectores que no se identifican con ningún partido, entonces se puede hablar de una desarticulación de la *matriz constitutiva de actores sociales*<sup>11</sup> que ha supuesto un debilitamiento de los viejos actores colectivos (sindicatos, corporaciones, confederaciones, etcétera) y un estrechamiento de su espacio de organización política. Lo anterior a la par de un aumento de la heterogeneidad social con un incremento sustancial de sectores *no organizables* con pautas de no identificación partidaria (con los problemas que ello supone en términos de debilidad orgánica) y un ensanchamiento de la brecha entre reivindicaciones corporativas y politización global. La sumatoria de todo lo anterior no puede más que arrojarnos la evidencia de una crisis de los mecanismos de mediación y representación.

Como todos sabemos, el problema de fondo en México viene a ser el cambio político. Y antes de que este problema se convirtiera en una confrontación entre Estado y sociedad, el problema a resolver era el de una apertura urgente de espacios democráticos. Los gobiernos de los años ochenta-noventa apostaron más a la modernización económica que a la modernización política, postergando la apertura de espacios de participación democrática. El Estado salinista modernizador apoyado—paradójicamente—en los viejos actores sociales, coronó la cerrazón de

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>11</sup> Esta categoría analítica ha sido propuesta por Manuel A. Garretón (“Actores políticos y democratización”) y queda definida por “la imbricación de una base social con una estructura político partidaria, de espectro amplio y cristalizado, presionando hacia el Estado como referente básico de acción colectiva”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, México, IISUNAM, octubre-diciembre de 1985, pp. 5-16.

los espacios institucionales para dirimir el desacuerdo social y político, dando al traste con los medios que hacen posible el consenso y la vida democrática por intercurso de las instituciones. El resultado es claro: una vuelta al pasado bárbaro de la política mexicana del lado de los viejos actores y una resistencia aumentada de lado de los nuevos.

En efecto, en México desde hace más de dos décadas se han venido perfilando lo que se ha denominado *nuevos sujetos políticos o nuevas presencias sociales*. Estas nuevas presencias se han ido configurando paulatinamente como movimientos diversos: mujeres, asamblea de barrios, comunidades indígenas, estudiantes, etcétera, configurando, al mismo tiempo, un gran contingente que, por ahora, no embona políticamente en el sistema de representación y en los mecanismos de mediación estatal.

Son estos nuevos actores sociales los que se desbordaron del espacio corporativo, o nunca entraron del todo, caracterizándose por una cada vez más acentuada orientación marginal. Muchos de ellos permanecieron así hasta la debacle del régimen corporativo, otros más confiaron su destino a la estructura del régimen y pasaron a engrosar las filas del sistema electoral neutralizándose a sí mismos en su capacidad de representación de demandas concretas de actores sociales específicos. Los disidentes anunciaban, desde entonces, las “nuevas realidades que hoy parecen ser irreversibles”.<sup>12</sup>

Ahora bien, la democratización de los mecanismos de mediación supone, precisamente, el abatimiento de la *participación marginal* y el establecimiento de la condición de plena *ciudadanía* “como sustento esencial de la presencia política democrática”.<sup>13</sup> Sin embargo, el principal obstáculo para el establecimiento de tal condición, inherente a una verdadera sociedad moderna, son los regímenes autoritarios y la condición social de pobreza. Estas condiciones, reproducidas por los modelos neoliberales excluyentes, producen y reproducen clases sociales “de segunda”, es decir, *pseudociudadanos* (desde la óptica del poder). Pobreza y autoritarismo social: ¡los peores ingredientes para construir la democracia!

La noción de *ciudadanía* alude a la igualdad de oportunidades obtenida como un derecho civil-legal, es decir, como el derecho a elegir *libremente* la participación contractual en el orden social y político. Sin

<sup>12</sup> Cfr. José Woldenberg, “La negociación político-social en México”, en Pablo González Casanova y Jorge Cadena Roa (coords.), *Primer informe sobre la democracia: México 1988*, México, Ed. Siglo XXI, 1989, p. 191.

<sup>13</sup> Cfr. Manuel Villa, *op. cit.*, p. 46.

embargo, para realidades como la nuestra bien podría caber el concepto de "ciudadanía de baja intensidad". Esta noción, como lo señala Guillermo O'Donnell,<sup>14</sup> supone, orgánicamente, la condición de pobreza aunque "no es explicada por ella". Al respecto agrega:

*La pobreza y la desigualdad limitan la efectividad de la ciudadanía porque muchos ciudadanos carecen de niveles mínimos de educación; por ello desconocen los derechos, procedimientos y recursos para defenderse efectivamente contra las violaciones. En estos términos, se puede decir que los pobres y otros ciudadanos subordinados gozan de derechos políticos, pero tienen una ciudadanía de bajo nivel en cuanto a sus derechos "más privados".*<sup>15</sup>

Así, el aspecto normativo en el que pudiera enmarcarse el concepto de ciudadanía como tal adquiere otra dimensión cuando se contrasta con una realidad social como la pobreza. En el plano de la participación política y, en particular, en la de la participación o marginación electoral, la pobreza desempeña una función decisiva en tanto que determina un comportamiento electoral específico, y en ciertas condiciones puede condicionar incluso los comportamientos antisistémicos y prosistémicos.

Se habla en general de conducta electoral participativa como función de un proceso de legitimación. En México, después de 1988, hubo un proceso de relegitimación encaminado a corregir la debacle del partido oficial en 1988. Sin embargo, a nivel de los llamados "microcomportamientos",<sup>16</sup> la condición social del elector marca una pauta específica que no tiene nada que ver con las identidades que los partidos políticos ofrecen en el mercado político y que, en un momento dado, debieran sustentar sus formas de representación en un Estado de Derecho.

En América Latina, la pobreza es una condición estructural y el pobre un actor social innegable que los partidos buscan como botín electoral pasivo, como masa mecánica de votos mas no en su condición de ciudadano. En este sentido, ¿qué tipo de identidades políticas pueden

<sup>14</sup> Cfr. "Ciudadanía, autoritarismo social y consolidación democrática", entrevista a Guillermo O'Donnell, en revista *Estudios Políticos*, cuarta época, núm. 2. México, UNAM-FCPyS, enero-marzo de 1994, pp. 167-173.

<sup>15</sup> *Idem*, p. 171.

<sup>16</sup> "...estrategia individual de voto ante un conjunto de opciones condicionadas estructuralmente". Cfr. Cristina Pizzonia, "El comportamiento electoral de la pobreza", en la revista *Relaciones*, núms. 5-6, México, UAM-Xochimilco, 1991, p. 95.

promover los partidos entre unos actores sociales que no interesan más que como cifras electorales manipulables?

No obstante, la pobreza posee un comportamiento electoral específico que no siempre es decodificado por los partidos políticos. El estudio al que hacemos referencia en la nota anterior sostiene la hipótesis de que

*la preminencia de los modelos pragmáticos sobre los normativos en los sectores económicamente bajos, restringe el interés por lo político a las demandas obtenidas por relaciones clientelistas donde el voto funciona como bien de pago; tendencia que se revierte en los sectores más altos. Del mismo modo, la tendencia política está condicionada por las mismas variables tal que el apoyo a los partidos responde a distintas argumentaciones según los sectores...*<sup>17</sup>

Las conclusiones a las que llega el estudio citado, después de una comprobación empírica exhaustiva, van en el sentido de que los sectores más pobres en términos de ingresos determinan sus *tendencias políticas* en términos "valorativos", por lo que su apoyo a un determinado partido y su lealtad dependerán del tipo de bien que ofrezca cada uno.<sup>18</sup>

El apoyo al PRI es elevado en las clases de menores ingresos, con mayores niveles de lealtad y voto seguro. No obstante, el peso de la *valoración pragmática* de estos sectores es tal que hace que el voto sea *voluble o rotativo* hacia la oposición a la izquierda del PRI.

Para el PAN, la lealtad y el voto seguro están relacionados con los niveles de ingreso más alto reforzado *normativamente*.

En el caso del PRD, su electorado se estructuró al calor de la crisis de hegemonía electoral del PRI más que de una nueva identidad político-electoral, de ahí que este partido padezca también la volubilidad de los electores, pero ello explica también su papel como una *opción partidaria* (voto futuro) que es mayormente buscada en los niveles de más bajos ingresos.<sup>19</sup>

Lo anterior resulta revelador de una conducta específica del electorado mexicano motivada más por *factores personales de índole pragmá-*

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>18</sup> "...la consistencia de las *tendencias electorales* que denominamos en este trabajo como dureza o seguridad en el voto, varía según el sector social de pertenencia; en los bajos la satisfacción de las demandas aumentan la seguridad del voto por el partido oficial. La tendencia favorable a los partidos de oposición se concentra en el *voto de reserva*, en una suerte de búsqueda por el partido político "solucionador", sin que ello implique compromisos partidarios fuertes". *Vid.* Cristina Pizzonia, *op. cit.*, p. 112.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 114.

*tica que por aquellos de índole ética o normativa.* Comportamiento detrás del que está, sin duda, la pobreza, el conformismo y sus derivados sociales.

Ello nos hablaría también de una participación electoral encuadrada, precisamente, en lo que O'Donnell ha llamado "ciudadanía de baja intensidad" que sustenta un mecanismo de *legitimación precaria*. Además de ello, nos revela que las identidades partidarias no corresponden, del todo, con las identidades sociales de los grupos. En este sentido, nos preguntaríamos si el comportamiento electoral en el periodo inmediato a julio de 1988 mostraba una pauta de comportamiento pragmática, sin identidad y con un nivel de rotación tan elevado, ¿qué se puede esperar de una votación en unas elecciones que se enmarcan en la mayor crisis social y política que haya tenido lugar en el periodo posrevolucionario?

### *Las paradojas de la modernización*

Habría que reconsiderar las teorías de la modernización que suponen que a un mayor atraso económico correspondería una menor participación política.<sup>20</sup> En estas teorías se parte de que a un mayor desarrollo económico correspondería una mayor democracia, competitividad partidaria y participación política. Sin embargo, ya han sido muchas las evidencias que han cuestionado este modelo típico ideal a la luz de los peculiares desarrollos de las estructuras de los países de capitalismo postardío. Varias consideraciones han sido hechas a estas teorías, a saber:

- Que el ritmo de la modernización de estas sociedades no corresponde al ritmo de las transformaciones de las instituciones políticas y, por ende, no hay una capacidad adecuada para absorber los volúmenes de demandas de participación;
- Que el desarrollo económico es también un catalizador de la desestabilización al crear expectativas que el propio sistema es incapaz de satisfacer.<sup>21</sup>

Y aquí es Eisenstadt profético cuando señala que *la ruptura de un sistema en vías de modernización es factible cuando no se ha desarrollado*

<sup>20</sup> Cfr. S. M. Lipset, *El hombre político*, Buenos Aires, Eudeba, 1964, pp. 166-167.

<sup>21</sup> Dígalo si no el papel que juegan las políticas neocorporativas en los países desarrollados articulándose al sistema partidario para realizar ajustes funcionales de la economía que eviten el desorden del ciclo económico. Cfr., G. Lehmbruch, "Corporativismo y gobierno de partidos", en Schmitter y Lehmbruch (coords.), *Más allá del Estado y el mercado*, vol. I, México, Alianza, 1992.

“un sistema de instituciones modernas capaces de absorber el cambio continuo”,<sup>22</sup> allí en donde se localizan sectores poblacionales marginados, poco identificados con la nueva sociedad e inmersos, consecuentemente, en un conflicto entre estas dos esferas de la sociedad dual.

La modernización social y económica impacta el fenómeno de la participación política en tanto actividad de los ciudadanos privados encaminada a influir en las decisiones de gobierno. Y aquí es necesario establecer que la relación entre desarrollo y participación *no es directa* sino que está mediatizada por el *status* socioeconómico (variables *ingreso* y *educación*) y el involucramiento organizacional (pertenencia o no a organizaciones de representación de intereses sociales).

En México, contrariamente a lo que sostendrían los enfoques clásicos de la modernización, el desarrollo económico no ha implicado un aumento de la participación, lo cual se explica por el hecho de que en México, a diferencia del modelo de las sociedades occidentales, *la dinámica del sistema político es la variable condicionante del desarrollo político*.

La hipótesis que se maneja en este sentido<sup>23</sup> es que *la centralización del poder, el modelo seguido por el sistema político, ha producido una especie de manipulación de grupos sociales dentro del sistema político, caracterizando así la estructura política mexicana*.

### **Nuevas identidades y nuevas formas de participación política en la crisis**

No hay que buscar demasiado para afirmar que en México la democratización del sistema político ha sido una quimera que, desde Madero, ha estado esperando el punto de su avance y consolidación sin llegar nunca. Se puede hablar de intentos “liberalizadores” del régimen e incluso del sistema político (¿qué otra cosa si no puede ser la oleada de reformas electorales desde 1976?), pero no de una iniciativa global, estructural e integral de democratización. A pesar de la inercia liberalizante de los últimos cuatro gobiernos de la República, el hecho es que desde entonces se ha ido viviendo con mayor agudeza una fase histórica de destrucción

<sup>22</sup> S. Eisenstadt, *Ensayos sobre el cambio social y la modernización*, Buenos Aires, Tecnos, 1964. Citado por Consuelo Lima Moreno y Monique Robert Godbout, “Movilidad electoral y modernización”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, México, IISUNAM, abril-junio, 1988.

<sup>23</sup> Básicamente por José Luis Reyna, en *An Empirical Analysis of Political Mobilization: The case of Mexico*, N. Y., Cornell, 1971.

constante de vías y espacios de participación democrática y de un fortalecimiento del autoritarismo de Estado como expresión de una debilidad que lo ha llevado a lo que hoy parece una crisis de legitimidad sin muchas vueltas.

El México corporativo que basó la construcción de la legitimidad del régimen en una participación inducida *por* y *para* el Estado, que ponía en acción a actores sociales anclados en identidades socio-ocupacionales y clasistas; en organizaciones políticas vinculadas a organismos sindicales paralelos y empáticos, dejó de ser la fuente de producción y reproducción del consenso de un Estado corporativo que se revuelve en una crisis sin retorno.

La crisis del progreso de los años ochenta y la modernización neoliberal salinista han traído una creciente desorganización social en varios niveles, a saber:

- Organizacional-comunitario (familia, trabajo, escuela, religión, etcétera).
- Institucional (partidos, sindicatos, parlamento, corporaciones, actores colectivos, identidades sociales, etcétera).
- Estado (en cuanto a la articulación específica con la sociedad).

En este marco, la sociedad se ha movido progresivamente hacia una complejización creciente que supone pautas culturales nuevas hacia el funcionamiento de un sistema social urbano-industrial. No obstante, no ha podido hallar identificación social, simbólica y política, en los vehículos de representación y participación que la esfera estatal ha puesto en acción desde los años cuarenta. El reclamo de participación y reconstrucción de identidades sociales se ha agudizado en los últimos treinta años sin haber hallado espacios ni mecanismos de acción societal que se ajusten funcionalmente con el sistema político y sus mecanismos de intermediación típicos: los partidos políticos.

Lo anterior nos habla del modo específico en que se ha estructurado la sociedad y sus principales actores sociopolíticos, así como su mundo de relaciones y significaciones. Su evolución supondrá momentos de ruptura y transformaciones en los que, como ahora, tienden a desaparecer los viejos modos de estructuración y articulación de las identidades sociales. En el marco de la ruptura posible del régimen corporativo mexicano es pertinente preguntarse entonces por la democratización como un proceso de reconstitución de actores e identidades sociales en el marco de una nueva matriz de articulación sociopolítica. Como lo ha señalado Garretón, *un sujeto histórico se expresa casi siempre y parcialmente a través de varios actores sean organizaciones, grupos o individuos.*

Los actores en el caso de la estructuración social en México, como en otras latitudes de América Latina, se estructuran, según Garretón, en torno a polos constitutivos tales como:

- a) *Un polo particularista o corporativo* configurado por: 1. Condiciones socio-culturales de la categoría social a la que pertenece el actor; 2. Las demandas respecto a esas condiciones, y 3. Las características organizacionales e institucionales del entorno en el que se desenvuelve el actor-sujeto.
- b) *Un polo sociopolítico* el cual está configurado por: 1. La orientación a la manutención, modificación o cambio en el sistema social; 2. La referencia estatal, y 3. El tipo de relaciones con otros actores en el desarrollo de estas orientaciones.<sup>24</sup>

A partir de estos polos tenemos sujetos sociales que resisten a través de luchas sociales orientadas hacia el Estado, que no encuentran canales intermedios para hacer política con cierta continuidad y que acaban sobrepolitizándose (¿EZLN?). Ante ello, señala Zermeño, opera la lógica de un actor suicida y una actor asesino (el Estado) que se enfrentan convirtiendo en un horizonte catastrófico la acción de la sociedad.

En México la "paz social" ha sido, en realidad, un ciclo de efervescencia de movimientos sociales, más tarde truncados, cooptados, divididos y... resueltos.<sup>25</sup>

En cualquier caso, *la ausencia de aparatos intermedios anclados en lo social* es un punto crucial en la sociedad mexicana a la hora de la política. Es por ello que la actitud política de la sociedad mexicana se aglutina en torno a dos núcleos:

- El del sistema político a través de la lucha electoral (de base corporativa aún).
- Y los movimientos defensivos de base.

El esquema anterior da lugar a una creciente dinámica excluyente y, al mismo tiempo, deslegitimadora del lado del sistema político mexicano. Una *legitimidad informal* se construye, sin embargo, del lado de los actores sociales que dan vida a los movimientos de base.

Los ejes de la polarización entre fuerzas de izquierda y derecha (en distintas gradaciones) y la existencia de un centro cómodo y pragmático podría pensarse como un *eje horizontal* de fuerzas funcionales que se

<sup>24</sup> Cfr. Manuel A. Garretón, *op. cit.*, p. 9.

<sup>25</sup> Zermeño, *op. cit.*, p. 76.

tendría que dar en México; sin embargo, lo que se presenta es uno *vertical* entre Estado y sociedad. En la parte superior del eje vertical una política todavía corporativa parlamentaria y electorera; en el extremo inferior, la "nueva política", marginal, defensiva, reivindicatoria y, las más de las veces, reformista y autonomista de los movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil. Estos polos han llegado a un punto de colisión, habiendo podido evitarlo, que configura escenarios difíciles e inciertos para el futuro inmediato.

Como señalábamos antes, el eje de relación Estado-sociedad se ha polarizado dentro de un eje vertical que ha llegado a una colisión frontal. En uno de los polos, el del Estado y su partido, el poder sigue siendo ejercido verticalmente produciendo efectos contradictorios y catastróficos. En el otro polo, el de los movimientos de base y las organizaciones de la sociedad civil, el poder es ejercido horizontalmente toda vez que han ido adoptando un carácter desideologizado, lo cual les ha permitido concretar sus demandas.<sup>26</sup> Una lógica en la que el Estado no entra porque no podría entenderla; es por ello que no han podido ser cooptados ni enfrentados como en el pasado en el que la pauta popular-corporativa lograba desmontarlos o destruirlos con relativa eficacia.

La legitimidad de estos nuevos actores va creciendo, mientras la del régimen se tambalea amenazando con caer estrepitosamente sobre la sociedad. Aquélla se sustenta en la realidad de un nuevo sujeto social en la que el ciudadano pugna por ser el protagonista central del quehacer político. Los partidos buscan desesperadamente su apoyo sin dejar de utilizar sus pautas clientelares que, ahora, han dejado de ser efectivas. Los ciudadanos se sobreponen a su singularidad a través de los colectivos que, a su vez, utilizan pragmáticamente a los partidos *sin buscar su representación*, lo cual está pesando sobre una legitimidad cada vez más precaria que ostentan todos los partidos políticos.

En el marco anterior, las elecciones experimentan una transformación cada vez menos lenta: de ser vehículo de legitimación de un Estado corporativo, pasan a ser cada vez más uno de confrontación política civilizada. Una forma en que la sociedad subordina la dinámica del Estado a sus fines.

No obstante, en México, este patrón aún no se ha perfilado, pues las inercias de un régimen político autoritario y un sistema político disfun-

<sup>26</sup> La dinámica por la que transcurrió la Convención Nacional Democrática organizada por el EZLN en los primeros días de agosto de 1994, es una muestra de esta nueva lógica autonomista, poco ideologizada, que ha permitido concretar las demandas y nuclear a un amplio espectro de movimientos sociales de base.

cional a las demandas y a las nuevas identidades de la sociedad civil han creado un estado de guerra en el que la vía electoral parece desdibujarse como opción de reconciliación nacional y refundación de un orden social y político nuevo.

### Los saldos de la revuelta de los ciudadanos

La revuelta chiapaneca de 1994 evidenció que la crisis de representación mezclada con una también evidente crisis de legitimidad podían mostrar el verdadero rostro de un régimen político excluyente alejado completamente de las mayorías pobres del país. Un régimen que durante cinco años se negó a abrir espacios de participación política a unos actores sociales que, desde hace más de veinte, resolvían sus problemas más apremiantes por la vía de la autorganización y la protesta civil. La exclusión social y política como la única identidad real de una ciudadanía "de baja intensidad", como la llama O'Donnell, que ahora es la nueva mayoría en la sociedad mexicana.

El Estado mexicano llevó a los extremos la estatización de la sociedad al grado de violentar el propio marco constitucional que le daba razón de ser en el marco de la nación. Sin embargo, la tendencia se está revirtiendo violentamente en una dinámica inversa de "societización" del Estado y de privatización del espacio público. El consenso producido por las vías tradicionales se ha resquebrajado, los pactos sociales naufragan mientras la sociedad se reorganiza al margen de los mecanismos de mediación del Estado. Reorganizar las reglas para la búsqueda de un *nuevo consenso* y una *nueva legitimidad* viene a ser la apuesta de los nuevos actores sociales para el presente.<sup>27</sup>

Chiapas escenifica la parte más visible y radical de la revuelta ciudadana. La incapacidad de los partidos ha propiciado su propio desplazamiento y sustitución (coyuntural) por las iniciativas ciudadanas para preservar el orden y garantizar una vía de reorganización del orden político. Después de la revuelta de Chiapas, el imperativo de que la sociedad civil participe para garantizar unas elecciones limpias que refunden el orden político, so riesgo de guerra civil, es claro. En tanto, el Estado se ha agazapado en su caparazón de instituciones viejas. Los partidos políticos, confundidos, no aciertan el rumbo a seguir.

<sup>27</sup> Cfr. Gilberto Meza y Antonio Padilla, "Los nuevos electores", en *Política*, suplemento del periódico *El Nacional*, núm. 118, 8 de agosto de 1991, p. 4.

No obstante, algo empezó a cambiar, a pesar del régimen, al comienzo de la década de los noventa. Los cambios en el gobierno ya no son como los que, desde el porfiriato, se hacían dentro de la óptica de “cambiar para que nada cambie”. Los movimientos internos ahora sí sacuden a la clase gobernante. La lucha por el poder ha cambiado sus formas desde 1988. Por ejemplo:

- Hoy día hay 16 gobernadores interinos como solución vertical a las sospechas de fraude electoral y como un mecanismo para evitar la ingobernabilidad en los estados;
- Existen 3 gobernadores de oposición;
- Existen en el Congreso Federal 150 diputados de oposición y varios senadores;
- Proliferan movimientos de resistencia o protesta civil (incluso brotes de guerrilla urbana y rural).

Pero lo más significativo, que habla de una recomposición real de la matriz de articulación de actores, es decir, de la sociedad mexicana, es la aparición de decenas de grupos, asociaciones u organizaciones civiles que en todo el país pugnan por abrirle (o arrancarle) al Estado espacios de participación democrática sin tener necesidad de pagar una larga factura al sistema político y sus mecanismos electorales. Y esta cruzada civil (hasta cierto punto al margen de lo electoral), busca redimir al sistema político y sus mecanismos; sólo que ya no para beneficio de la clase política, sino simplemente para lograr un régimen democrático que garantice la paz y el bienestar social para toda la sociedad.

En octubre de 1992 doscientos grupos de ciudadanos se aglutinan en el *Movimiento de Ciudadanos por la Democracia*. Surge así uno de tantos nuevos actores sociales que empiezan a desafiar la precaria legitimidad del régimen. Presionando a los partidos a pactar verdaderas reformas, y sabiendo –al mismo tiempo– que éstas son insuficientes e incapaces para cerrar la brecha entre un régimen excluyente y despolitizador y una sociedad civil en movimiento.<sup>28</sup>

Estos nuevos actores pueden ser organizaciones no gubernamentales, de todo tipo, sindicatos independientes que rechazan la lógica corporativa, organizaciones aglutinadas en torno al movimiento urbano popular.<sup>29</sup> Todas ellas marcando distancia de los fines del gobierno y los

<sup>28</sup> José Agustín Ortiz Pinchetti, “El regreso de la pasión política”, en *La Jornada*, 7 de enero de 1993, p. 9.

<sup>29</sup> “Tan sólo la Asamblea del Movimiento Urbano Popular (ANAMUP), tiene contingentes or-

partidos políticos, utilizando a los partidos de oposición para castigar al partido del gobierno. La mayoría de estas organizaciones trata de ser consciente de la necesidad de permanecer al margen de cualquier partido político. No obstante, todas ellas son conscientes también de su papel decisivo en el proceso electoral de 1994.

Sin embargo, la negociación de la paz en Chiapas aún está determinando el curso de la política nacional en los próximos meses. Lo acepten o no los políticos del sistema, cualquiera de los escenarios pre y pos-electorales tendrán como referente la existencia de una rebelión que no ha sido desactivada ni militar ni políticamente y que progresivamente ha venido ampliando sus bases sociales. Las elecciones de agosto de 1994 son una prueba de fuego para el sistema y para las fuerzas sociales y políticas que, de una forma u otra, están apostando su suerte a los resultados de unas elecciones no exentas de duda.

Para la sociedad, la cuestión parece ser no tanto la reformulación de una *democracia procedimental* limitada al ejercicio automático del voto y la espera pasiva de sus resultados estadísticos; ello no resuelve el problema del tipo de representación estatal corporativa que aún está vigente en los espacios más tradicionales del sistema y que excluye toda participación ciudadana racional; tampoco resuelve las cuestiones estructurales del sistema político que suponen una serie de relaciones perversas (presidencialismo, partido de Estado, relaciones jefe de gobierno-PRI, programas sociales utilizados electoralmente, etcétera) que excluyen la activación de verdaderos mecanismos de representación democrática y participación ciudadana.

Lo que está en juego, y no resuelven las elecciones de 1994, es el desmonte de la estructura autoritaria que impide ventilar democráticamente, y menos resolver, los problemas sociales de las mayorías. Tampoco van a resolver los conflictos que ha provocado la polarización de intereses entre unos sectores privilegiados por el premoderno sistema político y la políticas neoliberales y una gran mayoría de la población cuyo precario bienestar se deteriora desde hace más de una década sin encontrar forma de revertirlo haciendo valer unos derechos sociales que autoritariamente son violados por el propio régimen.

---

ganizados en diecinueve estados de la república y cuenta con quince organizaciones en la ciudad de México que han sabido mantenerse unidas a pesar de las diferencias ideológicas que puedan mantener, específicamente, alrededor de la política mexicana (...) El número promedio de cada una de las organizaciones medias que pertenecen a la ANAMUP es de cinco mil familias, lo cual equivale en términos medios a veinte mil miembros de cada caso...”, "Muestran organizaciones integrantes del MUP clara tendencia de votar en 94 por partidos de izquierda", en *El Financiero*, viernes 5 de noviembre de 1993, p. 38.

La reconciliación nacional no pasa por unas elecciones de antemano carentes de credibilidad. La democracia tiene que ser reformulada en sus propósitos y su contenido ético que es, ya lo dijo Gramsci, la propia sociedad civil. Las elecciones podrán llevarse a cabo por inercia institucional, pero los cambios en la naturaleza de la representación y la participación políticas de toda la sociedad no serán resueltos por la vía electoral, sino de la apertura de nuevos espacios institucionales para la negociación de nuevas reglas políticas, un nuevo pacto social, como condición *sine qua non* para la producción y reproducción de una democracia cuyo contenido real sea, ahora sí, la justicia social y la tolerancia.

### Colofón poselectoral...

La representación de corte estatal-corporativa que durante más de cincuenta años ha sido funcional al sistema político mexicano se ha re-editado de forma inesperada. Y hay que reconocer que los analistas del proceso político mexicano, que en los últimos cinco años observamos evidencias inequívocas de una crisis de esa forma poco democrática de representación y su tránsito hacia una *de tipo democrático*, nos hemos llevado la gran sorpresa de nuestras vidas. Ni la representación democrática y ni siquiera la aparición del ciudadano elector de opciones factibles han tenido lugar en México. Ambos, ciudadanía y representación democrática, habían sido los grandes protagonistas esperados en la contienda de agosto de 1994. Los hechos, que no las cifras, así lo evidenciaban... y así lo creímos.

Después de la crisis política del partido oficial en 1988, la sociedad mexicana parecía haber encontrado, por fin, *un largo y sinuoso camino* hacia el cambio político. El PRI seguía en pie pero notablemente debilitado por sus propias contradicciones y pugnas internas. Las ofertas panista y neocardenista lo eran todo, y no era poco, frente a lo que ya se había tenido durante más de sesenta años de priísmo autoritario. En 1991 la maquinaria del partido oficial, amamantada por el gobierno salinista, logró rehacer algunos de sus feudos perdidos, otros siguieron en manos de la oposición. No obstante ello, la sociedad siguió pujando a lo largo de toda la cuesta neoliberal del sexenio salinista... hasta que llegó Chiapas. La rebelión *neozapatista* y los nuevos mitos que ello rápidamente produjo dieron a un sector de la sociedad nuevas esperanzas; para otros, los beneficiarios del liberalismo social salinista, significó la cercanía del fin de la cómoda arbitrariedad legalizada que habían disfrutado

por casi más de medio siglo de gobiernos priístas. La cercanía de un cambio, cualquiera que hubiera sido, animó a la sociedad a una masiva participación desesperada, paradójicamente, con la esperanza de encontrar los atisbos de nuevos perfiles políticos para una sociedad cansada de esperar un bienestar que no llega nunca.

No obstante, un gran contingente de esa misma sociedad votó por el PRI replegándose a la falsa seguridad de un sistema de prebendas, transas, caridad e ilusiones sin las que el mexicano "de abajo" (la gran mayoría) parece ya no poder vivir. Gracias a este sorpresivo comportamiento electoral Ernesto Zedillo, apoyado en los recursos públicos del Estado y refuncionalizando la maquinaria corporativa de un PRI desesperado pero apostador, parece haber ganado unas elecciones que no están nada exentas de sospecha. ¿Y la oposición?

La representación de los intereses de la sociedad parece no haber encontrado vehículo idóneo en las ofertas políticas de la oposición. Demasiada retórica. Demasiados riesgos sin garantías. Demasiadas sospechas ventiladas entre unos y otros. Si todos tienen cola que les pisen... mejor la del dinosaurio que, cínicamente, no se oculta y tiene el poder de legitimar cualquier arbitrariedad. A pesar de ello, la otra cara de la sociedad, no la del miedo y la comodidad conservadora, sino la del riesgo racional y la apuesta democrática, votó por el cambio. Sin duda, el mayor agravio del régimen a la sociedad fue el hecho de que, confiada ésta, el gobierno haya dado al PRI una ventaja cínica frente a una oposición pujante que, no sin cierta complicidad, estaba apostando su suerte a un sistema electoral maquillado y siempre expuesto a la sospecha.

No hay optimismo que valga. En México no ha habido voluntad democrática de parte del gobierno de Salinas de Gortari, ni del PRI, ni de su candidato, ni de los empresarios parásitos del salinismo, ni de la burocracia obrera y campesina... Pero ¿y la sociedad?

Los riesgos de convertirse en un ciudadano que actúa con conciencia de sus intereses individuales y colectivos han sido el reto que medio electorado ha preferido no enfrentar enroscándose dentro de la concha de un comportamiento tradicional, de masas tuteladas, frente a la amenaza de la sana incertidumbre del reto democrático.

No es fácil probar un fraude sofisticado que media sociedad no quiere molestarse en creer. Sin embargo, no es *la esfera de la legalidad electoral*, la de las cifras y los datos, la única que puede dar cuenta del estado de salud en que se encuentra la sociedad mexicana. El gobierno, el IFE y los partidos políticos podrán legitimar unas elecciones no exentas de duda. A pesar de ello, en *la esfera del conflicto social* ninguna artimaña legal o procedimental podrá ocultar la magnitud de la burla que el

gobierno y el partido oficial han infringido a una sociedad que emitió, ingenua o coaccionada, un masivo voto de esperanza.

Los que habíamos pensado que la democracia había llegado para quedarse, nos hemos despertado con la novedad de que, como atinadamente ironizó Lorenzo Meyer, "el dinosaurio sigue allí" y, burlescamente, hasta por Chiapas se pasea.